



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

La Plata, 27 de mayo de 2025.

VISTO: Este legajo FLP 38935/2023/26/CA6 "Querellante: Fundación Poder Ciudadano y otro. Imputado: Insaurrealde Martín y otros s/legajo de apelación" procedente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 2 de Lomas de Zamora, Secretaría n° 4;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. La resolución, el recurso y los agravios.

1. Contra la resolución del 24 de septiembre de 2024, emitida en el incidente n° 20 y mediante la cual el juez de grado hizo lugar a la solicitud de transferencia efectuada por Sofía Clérici de la suma de US\$ 569.911 (quinientos sesenta y nueve mil novecientos once), secuestrada en autos en el domicilio sito en la calle interna Moreno, Lote N° 137 del Barrio "Los Lagos", ubicado en la calle Sarmiento N° 5380 de Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, con la finalidad de su acogimiento provisorio al RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS, conforme Ley N° 27.743, previa acreditación de la titularidad y demás datos de individualización de la cuenta bancaria informada por la defensa de la imputada, interpusieron recurso de apelación el doctor Mariano Abel Ezeyza y la doctora Julieta Martín Pantano, apoderados de la Unidad de Información Financiera -en adelante U.I.F.-.

2. En la aludida pieza recursiva sus presentantes destacaron la gravedad de los hechos que se investigan -por su vinculación con posibles maniobras de corrupción-, y refirieron que el hallazgo de dinero en el domicilio de la nombrada Clérici genera la razonable sospecha de que el mismo constituye el producto o provecho de



actividades ilícitas desarrolladas por Martín Insaurrealde, relacionadas con el ejercicio de la función pública.

Señalaron que no se ha logrado acreditar que la suma sea propiedad de ella, y tampoco la licitud de su origen.

Consideraron elemento relevante que Clérici haya sido situada en un viaje al exterior junto con Insaurrealde, siendo la legitimidad de los fondos para su concreción objeto de la presente pesquisa. En esa dirección, dijeron también que existen claros indicios de que la nombrada realizaba pagos en nombre de Insaurrealde y con dinero provisto por él.

Hicieron hincapié en que el Régimen al que pretende adherirse tiene como finalidad permitir que los sujetos exterioricen activos de origen lícito no declarados ante el fisco.

Y luego indicaron que *"permitir la transferencia de los fondos y la adhesión condicional de Sofia Clerici al Régimen de Regulación de Activos tomando por ciertos los dichos de la imputada sobre el origen del dinero, implica un grave perjuicio contra el orden económico y financiero"*.

Finalmente, recordaron que el art. 41 de la ley 27.743 no contempla la posibilidad de que pudieran acogerse provisionalmente al régimen aquellos sujetos con procesos penales en trámite por los delitos contra la administración pública.

II. Trámite en esta Alzada.

1. Ante este Tribunal hicieron presentaciones en los términos de los arts. 453 y 454 del Código Procesal Penal la fiscalía, el defensor de Sofía Clérici y la representante de la U.I.F.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

2. La *vindicta* pública no adhirió al recurso de la querella, pero puso de manifiesto su postura coincidente con aquella postulada por la representante de esa parte ante la primera instancia, según la cual no debía accederse a lo peticionado por la imputada.

3. La defensa, por su parte, respaldó la solución adoptada por el juez de grado y destacó que no hay pruebas en la causa que conecten el dinero solicitado con el ex funcionario, que la fiscalía solicitó el llamado a indagatoria de diversas personas pero no de Clérici y el *status* de inocencia que beneficia a la nombrada.

Sostuvo también que la U.I.F. insiste en criminalizar a su asistida *"por su condición de mujer, tratándosela de prostituta"*, obviando una perspectiva de género, que la ley 27.743 no exige analizar de dónde proviene el dinero que se pretende incluir en el régimen que regula y que la nombrada no reviste carácter de funcionaria pública.

Indicó, por último, que en el caso de Clérici procede la adhesión condicional que prevé el art. 41, inc. "e", de la aludida norma, y que la prohibición de innovar y la inmovilización dispuestas por el juez reflejan una total inexistencia de gravamen que fundamente la apelación.

4. La U.I.F., finalmente, siguió la línea trazada en su apelación, remarcó que antes de autorizar la adhesión condicional al régimen de la Ley 27.743 es necesario que se descarte el origen ilícito del dinero que se pretenden incluir en el mismo y que el art. 41 de la norma no contempla la posibilidad de que pudieran acogerse provisionalmente los sujetos con



procesos penales en trámite por delitos contra la administración pública.

III. Antecedentes.

1. En el marco del principal, Sofía Clérici, a través de su representante, manifestó la voluntad de adherir al régimen previsto en la ley 27.743 de exteriorización de capitales y, consecuentemente, solicitó la inmediata transferencia y/o depósito de los fondos secuestrados y retenidos en este proceso, que se encuentran a disposición del juzgado en la cuenta bancaria -en dólares- n° 9801407962.

2. Con ese y otros requerimientos efectuados por la nombrada el *a quo* formó el incidente n° 20 -FLP 38935/2023/20-, donde corrió vista a las querellas y a la fiscalía.

3. Contestados por las partes los traslados conferidos el magistrado se expidió en los términos adelantados.

Los fundamentos del fallo giraron en torno a la necesidad de garantizar a Clérici el derecho a gozar del *status* de inocente hasta tanto se demuestre lo contrario mediante sentencia firme -en este sentido, el *a quo* destacó que la nombrada no ha sido convocada a prestar declaración indagatoria en la causa-, y de evitar frustrar las finalidades procesales perseguidas al momento de dictarse las medidas cautelares respecto de su patrimonio.

Desde tales enfoques y teniendo en cuenta lo previsto en el art. 41, inc. "e", último párrafo, de la ley 27.743, fue que el *a quo* consideró viable la transferencia del dinero secuestrado a Clérici y el depósito en la cuenta propuesta, bajo condición de no innovar, hasta tanto sea





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

resuelta la situación procesal de la nombrada o el estado de la pesquisa así lo permita. Asimismo, como medida complementaria, dispuso la inmovilización y el bloqueo de la cuenta de destino de los fondos (puntos dispositivos II, III y IV de la resolución apelada).

4. Como se dijo, los representantes de la U.I.F. interpusieron recurso de apelación contra ese pronunciamiento, puntualmente, en cuanto hizo lugar a la transferencia del dinero.

5. El magistrado, en función de lo normado por los arts. 432, 438 y 449 *in fine a contrario sensu*, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, resolvió rechazarlo porque consideró que la decisión no le genera gravamen a los presentantes.

6. Ese temperamento motivó el recurso de queja de los aludidos querellantes y la formación del incidente n° 21 -FLP 38935/2023/21/RH1-.

Esta Sala, al expedirse sobre el asunto, señaló "*que la decisión atacada podría generar un agravio de imposible reparación ulterior toda vez que dejaría al organismo recurrente sin herramientas para impulsar la revisión de un decisorio que estima contrario a los fines para los que fue creado*" y, consecuentemente, declaró mal denegado el recurso de apelación cuyos agravios corresponde aquí abordar.

IV. Tratamiento de los agravios.

1. A juicio del Tribunal, la decisión de primera instancia debe ser revocada.

2. En efecto, nótese que al disponerse la inhibición general de bienes de los imputados en autos, entre ellos de Sofía Clérici, se tuvo en



cuenta que la causa estaba enderezada a determinar si se llevaron a adelante hechos de enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de activos provenientes de delito (FLP 38935/2023/2/CA1, resolución del 30/11/2023).

Se indicó que gravitaban sobre el asunto los arts. 23 y 305 del Código Penal, y se destacó que el Estado asumió obligaciones convencionales para investigar, juzgar y sancionar a los culpables de los referidos delitos, conforme señala el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -aprobada por la ley 26.097-.

Siguiendo los lineamientos de ese entramado legal se destacó la necesidad de disponer, desde el inicio de las actuaciones, medidas tendientes a asegurar un eventual decomiso de bienes relacionados con los delitos investigados, y a hacer cesar la comisión de los mismos o sus efectos, o evitar que se consolide su provecho, o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes.

Y, como síntesis, se señaló que *"el marco normativo mencionado (...), la naturaleza de los hechos investigados y no obstante el incipiente estado de la investigación, justifican el dictado de las medidas cautelares solicitadas"*.

3. A la fecha, la investigación sigue profundizándose y la situación actual de Sofía Clérici frente a la misma no ha variado. En los términos utilizados por el juez de grado al rechazar el sobreseimiento de la imputada, *"desde el punto de vista de la convicción provisoriamente generada, su situación resulta equiparable a la de una falta de mérito (art. 309, CPPN)"*.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

4. Por otro lado, no puede perderse de vista que se la investiga en autos como interviniente, en algún grado, de la puesta en circulación en el mercado de fondos de origen ilícito con posible apariencia de licitud que habría llevado a cabo Martín Insaurrealde, habiéndose originado esos fondos por un incremento patrimonial que, en principio, no encontraría justificación en los ingresos legítimos obtenidos en los distintos cargos de la función pública que desempeñó el nombrado de manera ininterrumpida en nuestro país desde el año 2009.

5. Luego, se advierte que la ley 27.743 sobre "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" -a la que Sofía Clérici pretende acogerse con la suma aludida- establece exclusiones expresas y absolutas del Régimen de Regularización -sin posibilidad de adhesión condicional- para casos en los que no puede descartarse que la solicitante se encuentre abarcada (arts. 39 y 40), a la vez que no contempla la posibilidad de un acogimiento provisorio para personas investigadas por delitos contra la administración pública (art. 41).

6. En definitiva, con el objeto de armonizar lo establecido en las normas que rigen la materia, la dirección que adoptó la pesquisa y la situación que en la misma atraviesa la solicitante, buscando, también, la estricta preservación de bienes que pueden estar ligados a presuntos hechos de corrupción, aparece conducente -de momento- revocar la decisión de transferir el dinero en dólares estadounidenses secuestrado a Sofía Clérici a una cuenta personal de la nombrada para acogerse a las previsiones de la Ley 27.743 "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", y ordenar el mantenimiento del mismo



bajo la órbita del juzgado actuante hasta tanto se despejen las cuestiones aludidas en los apartados precedentes, esencialmente el origen de los fondos.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución apelada, **DEBIENDO** el a quo proceder del modo indicado en el apartado IV.6 de los considerandos.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

CARLOS ALBERTO VALLEFIN

JUEZ

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS

JUEZ

Ante mí;

MARIA ALEJANDRA MARTIN

SECRETARIA FEDERAL

Se deja constancia de que la presente resolución se dicta conforme a lo previsto por el artículo 31 bis, último párrafo, *in fine* del CPPN (art. 109, RJN).

MARIA ALEJANDRA MARTIN

SECRETARIA FEDERAL





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

